



Consejo Económico y Social

Distr.  
GENERAL

Original: ESPAÑOL

---

**COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA**

REUNIÓN DE LAS PARTES DEL CONVENIO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN,  
LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA  
JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

**INFORME DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR ESPAÑA**

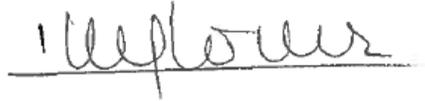
*El artículo 10, párrafo 2, del Convenio requiere que las Partes, en sus reuniones, sigan permanentemente una revisión de la aplicación del Convenio sobre la base de los informes comunicados regularmente por las Partes. Por la decisión I/8, la Conferencia de las Partes (Lucca, Italia, octubre 2002) estableció un mecanismo de presentación de informes por el que se pide a cada Parte que presente un informe en cada Reunión de las Partes, sobre las medidas legislativas, reguladoras y otras medidas adoptadas para cumplir el Convenio y ponerlo en práctica, de acuerdo con un formato de informe anexo a la decisión. Se pide a la Secretaría que, para cada Reunión, prepare un informe síntesis en el que se resuma el progreso efectuado y se identifiquen todas las tendencias significativas, los retos y las soluciones. El mecanismo de presentación de informes fue desarrollado además mediante la decisión II/10, que abordó entre todos la cuestión de cómo preparar el segundo y los subsiguientes informes.*

**El siguiente informe se presenta en nombre de España de acuerdo con las  
decisiones I/8, II/10 y IV/4.**

---

Nombre del funcionario responsable    María José Gómez García Ochoa  
de la presentación del Informe:

Firma:



Fecha:

2/12/2013

---

## **Informe de cumplimiento**

**Por favor, proporcione los siguientes detalles sobre el origen de este informe.**

---

<b>Parte</b>	<b>ESPAÑA</b>
<b>Punto Focal Nacional:</b>	
Nombre completo de la institución:	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Nombre y puesto del funcionario:	María José Gómez García-Ochoa Vocal Asesora, Vicesecretaría General Técnica
Dirección postal:	Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 28071-Madrid.
Teléfono:	<b>+34 91 597 68 28</b>
Fax:	
E-mail:	<a href="mailto:mjgomez@magrama.es">mjgomez@magrama.es</a>

### **I. PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME**

1. Este informe ha sido elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en colaboración con otros órganos de la Administración del Estado y de las Administraciones autonómica y local (a través de la Federación Nacional de Municipios y Provincias, FEMP). Se ha colaborado también con el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) en el que se integran cinco de las ONG españolas más relevantes, así como con otros representantes de la sociedad civil.

Siguiendo las recomendaciones del Secretariado del Convenio, tanto desde el Ministerio como desde el resto de órganos de la administración, se ha trabajado sobre la base del anterior Informe Nacional de Cumplimiento (INC) y se han realizado los oportunos comentarios, observaciones y actualizaciones directamente sobre el texto anterior.

2. El MAGRAMA y algunas Comunidades Autónomas han mostrado la información relativa al INC en sus páginas web y se ha llevado a cabo un proceso dirigido a fomentar la participación del público en general.

## **II. CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES PARA LA COMPRESIÓN DE ESTE INFORME**

3. El Convenio de Aarhus es de aplicación directa en España, tras su ratificación, en diciembre de 2004 y entrada en vigor, el 31 de marzo de 2005. El Parlamento aprobó, no obstante, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la cual transpone además las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Esta Ley tiene por objeto garantizar la efectiva aplicación del Convenio de Aarhus en todo el Estado. Es una Ley de carácter básico, lo que significa que, en virtud del reparto de competencias en el Estado español, las Comunidades Autónomas (gobiernos regionales) pueden adoptar decisiones legislativas más exigentes. En aquellas en las que no se ha desarrollado aún norma complementaria autonómica es la norma estatal directamente la que, a todos los efectos, garantiza la aplicación del Convenio en todo el territorio nacional. Este informe se centra fundamentalmente en la implementación del Convenio a nivel nacional, incluyendo algunas referencias genéricas al régimen autonómico

## **III. MEDIDAS LEGISLATIVAS, REGULADORAS Y OTRAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTAN LAS PREVISIONES GENERALES DE LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4, 7 Y 8 DEL ARTÍCULO 3**

4. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, implementa el Convenio en toda su extensión.

5. Por otra parte, en las Comunidades Autónomas se han promulgado diversas normas que implementan las previsiones de este artículo, tales como las siguientes: Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía y Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la información ambiental.; Ley 7/2006, de Protección Ambiental de Aragón; Ley 4/2006, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria; Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente de la Comunitat Valenciana; Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado de Cantabria y su Reglamento, aprobado por Decreto 19/2010 de 18 de marzo; Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente en La Rioja; Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, Ley 8/2007 de 15 de marzo de modificación de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla - La Mancha (posteriormente modificada mediante la Ley 11/2011, de 21 de marzo, de modificación de la Ley

9/1999), Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia y Ley 5/2010, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Otras Comunidades Autónomas elaboran en estos momentos normativa similar en sus ámbitos de competencia.

### **Artículo 3, párrafo 2**

6. El artículo 3.1 b) de la Ley 27/2006 reconoce el derecho de todos a ser informados de los derechos contemplados en esta Ley y a ser asistidos en su ejercicio, y en su artículo 5 establece las obligaciones generales de las autoridades públicas en esta materia. Asimismo la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, también establece, con carácter general, la obligatoriedad, por parte de los funcionarios y autoridades públicas de asistir al público y proporcionarle la información requerida y, asimismo, contempla la participación pública.

7. Mediante la Orden Ministerial AAA/1601/2012, de 26 de junio, se dictan instrucciones sobre la aplicación en los servicios del MAGRAMA de la Ley 27/2006, de 18 de julio, con el objeto de conseguir una mayor eficacia en la atención al ciudadano y una homogeneidad en la aplicación de los procedimientos.

8. Por otra parte, los Reales Decretos 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano y 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, determinan el funcionamiento y los controles de calidad de las Oficinas de Información de la Administración General del Estado.

9. Tanto en la Administración del Estado como en la autonómica y local se han implantado sistemas de información ambiental, desde los que se presta asistencia al público, de forma telefónica, presencial o por correos postal y/o electrónico, evacuando cuantas consultas se formulen e indicándole la forma más ágil de acceder a la información ambiental e informando sobre los instrumentos de participación y de acceso a la justicia si estima que se han vulnerado sus derechos. Alguna Administración Autonómica se ha incorporado a las redes sociales en sus sistemas de información ambiental.

10. En la Administración del Estado y en las Comunidades Autónomas existen listas de autoridades públicas, o se hallan en proceso de elaboración.

11. Con objeto de poder prestar la ayuda necesaria al público con la máxima eficacia, tanto por parte de la Administración del Estado, como de las Administraciones Autonómica y Local, se organizan periódicamente cursos de formación y jornadas, dirigidas a sus funcionarios sobre información ambiental y sobre la aplicación de la Ley 27/2006. Esta actividad formativa tiene en cuenta las recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus al incorporar desde el año 2010 un proceso de formación continua de funcionarios, de periodicidad anual centrado específicamente en la normativa y en la aplicación del Convenio y de la Ley 27/2006. A partir del año 2011 los programas de formación específica se hicieron extensivos al todo el personal de la AGE incluyendo a los miembros del poder judicial a través de los cursos

organizados por el Instituto Nacional de Administración Pública. Del mismo modo se desarrollan programas de formación específicos en información ambiental en el ámbito autonómico.

12. En noviembre de 2012 el propio Secretario de Estado de Medio Ambiente impartió una clase magistral sobre el Convenio de Aarhus en el Consejo General de la Abogacía de España dirigido a los Abogados del Estado.

13. En el marco de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en el MAGRAMA se ha implantado de manera satisfactoria un sistema de acceso por medios electrónicos a la información y al procedimiento administrativo, pudiéndose ya acceder, a más de 50 procedimientos en el ámbito del medio ambiente. Las Comunidades Autónomas han implantado procesos similares en sus respectivos ámbitos.

14. En los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley 27/2006, se establecen una serie de medidas para garantizar el acceso a la justicia y la tutela administrativa en asuntos medioambientales.

### **Artículo 3, párrafo 3**

15. El artículo 19.2 e) de la Ley 27/2006 encomienda al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), máximo órgano consultivo del Gobierno en materia medioambiental, la propuesta de medidas de educación ambiental que tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la sociedad en cuanto a los valores ecológicos y medioambientales, así como medidas que incentiven la participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales

16. El MAGRAMA, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos locales con mayor población, vienen desarrollando las siguientes actividades: convocatorias periódicas de ayudas, becas y subvenciones destinadas a fomentar la educación y concienciación respecto a los problemas medioambientales; realización de campañas, jornadas y seminarios de educación ambiental; organización de talleres educativos y exposiciones; y edición de manuales de buenas prácticas y otros documentos divulgativos. También se desarrollan programas y proyectos de educación ambiental y se dispone de organismos cuya competencia específica es la educación ecológica, así como la formación del público en orden a la concienciación relativa a los problemas medioambientales y a la participación en la toma de decisiones. Lamentablemente, las limitaciones presupuestarias han supuesto en ocasiones una disminución de este tipo de iniciativas.

17. El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) del MAGRAMA tiene como objetivo principal incrementar la responsabilidad de los ciudadanos en relación con el medio ambiente, desarrollando para ello diversas líneas de trabajo especializadas en educación ambiental: boletín electrónico, centro de documentación ambiental, programas de educación e interpretación ambiental, programas de formación, etc.

18. Por el MAGRAMA se edita periódicamente la revista “Ambienta”, cuya versión digital se encuentra disponible en el enlace <http://www.revistaambienta.es/>, registrando más de 10.000 visitas mensuales. En la mayoría de las Comunidades Autónomas también se ponen a disposición del público ediciones de revistas de divulgación de temas medioambientales y agroalimentarios.

#### **Artículo 3, párrafo 4**

19. El derecho fundamental de asociación se encuentra reconocido en el artículo 22 de la Constitución Española. Las asociaciones representan los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollan una función esencial e imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, para lo cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas conforme al marco legal y reglamentario de carácter general que las prevé. En este marco, tanto por parte de la Administración estatal como de la autonómica y la local, así como por distintas instituciones sin fin de lucro, se convocan periódicamente ayudas destinadas específicamente a entidades sin ánimo de lucro y a ONG que tengan por objeto la protección del medio ambiente.

20. Por otra parte, de forma periódica se conceden subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio para fines de interés social de carácter medioambiental.

21. Además, las ONGs que realizan actividades relacionadas con la preservación del medio ambiente pueden registrarse voluntariamente en la base de datos que mantiene el propio Ministerio.

22. Los artículos 2.2, 16.2 y 23 de la Ley 27/2006 reconocen la capacidad legal de las organizaciones y grupos de protección del medio ambiente para ser titulares de los derechos de participación pública y acceso a la justicia en asuntos medioambientales y el derecho a acceder a los beneficios de la justicia gratuita en los términos legalmente previstos. El artículo 19 prevé, expresamente, la participación de las ONG en el CAMA. Asimismo, en las Comunidades Autónomas también se cumple esta función a través de sus diferentes consejos asesores y se publican en sus páginas Web listados de las asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del medio ambiente.

23. El sistema jurídico nacional es totalmente compatible con estas obligaciones.

#### **Artículo 3, párrafo 7**

24. El artículo 19.2 f) de la Ley 27/2006 encomienda al CAMA la propuesta de las medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, valorando la efectividad de las normas y programas en vigor y proponiendo, en su caso, las oportunas modificaciones.

25. Con carácter previo a las Conferencias de las Partes de los Convenios Internacionales más relevantes, e “in situ” en el curso de la celebración de dichas Conferencias se mantiene permanente contacto entre las autoridades del Ministerio y los representantes de las ONG asistentes a las citadas COP

#### **Artículo 3, párrafo 8**

26. Resulta aplicable directamente la Constitución española de 1978 y el sistema de tutela constitucional, judicial y administrativa que se implanta en la misma, para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos por la propia Constitución y por las leyes.

#### **IV. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 3**

27. Por parte de España se siguen realizando grandes esfuerzos para poner a disposición del público la información ambiental. Ello requiere una labor continuada y exhaustiva, para lo cual se precisan medios técnicos y humanos con suficiente formación medioambiental, por lo que, en algunos casos muy concretos, resulta difícil suministrar la información ambiental con la rapidez deseable, debido a la complejidad de la misma. En grandes proyectos con documentación voluminosa, se detectan problemas para facilitar la consulta de la documentación ambiental y para suministrar copias de la información requerida, que se está tratando de subsanar. En ocasiones, la consulta se refiere a áreas temáticas cuya competencia corresponde a diferentes unidades administrativas, lo que implica la imposibilidad de contestar en un breve espacio de tiempo.

28. Aunque existen cauces democráticos de participación política mediante los procedimientos habituales y la posibilidad de intervención directa (orgánica, funcional y cooperativa) de los ciudadanos en la actuación de la Administración para la protección del medio ambiente, sin embargo se detectan aún ciertas carencias, pese al notable esfuerzo realizado, fundamentalmente en el ámbito organizativo de las distintas Administraciones.

29. El auge de los contactos a través de las redes sociales haría deseable que también en el ámbito de la Administración y, en concreto, en lo relativo al acceso e intercambio de la información en materia de medio ambiente, pudieran generalizarse estas prácticas. Sin embargo, los recursos humanos necesarios para tal objetivo suponen una importante dificultad.

#### **V. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES GENERALES DEL ARTÍCULO 3**

30. Dentro del procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos, planes y programas estatales, se ha previsto la puesta a disposición del público de la documentación ambiental y la tramitación telemática a través de la página web del MAGRAMA y de algunas Comunidades Autónomas. La participación pública a través de la web es un procedimiento generalizado en la actualidad. Los procedimientos abiertos y los que se han desarrollado en los últimos meses pueden ser consultados en el siguiente enlace: <http://www.magrama.gob.es/es/participacion-publica/listado.aspx>

31. En las Comunidades Autónomas existen procedimientos similares de participación pública a través de Internet.

#### **VI. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 3**

32. Están disponibles las siguientes direcciones de internet:

**Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente**

<http://www.magrama.gob.es>  
<http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/area-actividad/>  
<http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/otros-organismos-organizaciones/consejo-asesor-de-medio-ambiente-cama/>  
<http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/>  
<http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/analisis-y-prospectiva/>  
<http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-ambientales/>  
<http://www.prtr-es.es> (con enlaces a EPER y PRTR en Comunidades Autónomas)  
<http://www.fundacion-biodiversidad.es/>  
<http://www.sostenibilidad-es.org/>

### **Otros Departamentos de la Administración General del Estado:**

*Ministerio de Economía y Competitividad*

<http://www.ine.es> (estadísticas sobre generación de residuos, uso del agua y gastos en protección medioambiental).

*Ministerio de Industria, Energía y Turismo*

[www.minetur.es](http://www.minetur.es)

*Consejo de Seguridad Nuclear:*

<http://www.csn.es>

*Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía:*

<http://www.idae.es>

### **Comunidades Autónomas:**

*Andalucía:*

<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente>

*Aragón:*

<http://www.aragon.es/Temas/MedioAmbiente>

[http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA\\_InformacionDATosAmbientales/ci.01\\_Derecho\\_acceso\\_informacion\\_ambiental.detalleDepartamento?channelSelected=de0890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD](http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_InformacionDATosAmbientales/ci.01_Derecho_acceso_informacion_ambiental.detalleDepartamento?channelSelected=de0890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD)

[http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/ch.MA\\_InformacionDATosAmbientales.detalleDepartamento?channelSelected=de0890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD](http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/ch.MA_InformacionDATosAmbientales.detalleDepartamento?channelSelected=de0890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD)

*Asturias:*

<http://www.asturias.es>

<http://www.redambientalasturias.es>

<http://www.osasturias.es>

*Baleares:*

<http://pia.caib.es>

<http://dgbio.caib.es>

<http://oficinadelcanviclimatic.caib.es>

*Canarias:*

<http://www.gobiernodecanarias.org/>

*Cantabria:*

<http://www.gobcantabria.es>  
[www.medioambientecantabria.com](http://www.medioambientecantabria.com)

*Castilla-La Mancha:*

<http://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/calidad-ambiental>  
<http://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural>  
[http://pagina.jccm.es/medioambiente/atencion\\_informacion/index\\_partic\\_infamb.htm](http://pagina.jccm.es/medioambiente/atencion_informacion/index_partic_infamb.htm)  
<http://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/cambio-clim%C3%A1tico-0>

*Castilla y León:*

[www.jcyl.es/medioambiente](http://www.jcyl.es/medioambiente)  
<http://rednatura.jcyl.es/natura2000/>  
<http://www.patrimonionatural.org/>

*Cataluña:*

<http://www.gencat.cat/aca>  
<http://www.arc.cat>  
<http://www.gencat.cat/dmah>

*Extremadura:*

<http://www.gobex.es/gobex/view/main/index/index.php>  
<http://extremambiente.gobex.es/>

*Galicia:*

<http://medioambiente.xunta.es>  
<http://www.cmati.xunta.es>  
<http://www.siam.medioambiente.xunta.es>  
<http://www.a21.medioambiente.xunta.es>

*Madrid:*

<http://www.madrid.org>  
<http://www.asambleamadrid.es>  
[http://www.madrid.org/cartografia\\_ambiental](http://www.madrid.org/cartografia_ambiental)  
[http://www.madrid.org/rlma\\_web](http://www.madrid.org/rlma_web)  
[http://gestiona.madrid.org/azul\\_internet](http://gestiona.madrid.org/azul_internet)

*Murcia:*

<http://www.carm.es>  
<http://www.orcc.es>

*Navarra:*

<http://www.navarra.es>  
<http://www.crana.org>  
<http://www.nasursa.es>

*País Vasco:*

<http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es/>  
<http://www.udalsarea21.net>  
<http://www.irekia.euskadi.net/>  
<http://opendata.euskadi.net/w79-home/es>  
<http://www.geo.euskadi.net/s69-15375/es>

*La Rioja:*

<http://www.larioja.org>

*Valencia:*

<http://www.cma.gva.es>

**Federación Española de Municipios y Provincias:**

<http://www.femp.es>

## **VII. MEDIDAS LEGISLATIVAS REGULADORAS Y OTRAS MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PREVISIONES SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ARTÍCULO 4**

### **Artículo 4, párrafo 1**

33. En la Administración del Estado y en las Comunidades Autónomas se cuenta, en la mayoría de los casos, con sistemas para agilizar el suministro de la información ambiental a todos los usuarios, pudiendo acceder a un formulario de solicitud de información a través de las correspondientes páginas web e incluso realizar una tramitación telemática de dicha solicitud. A título de ejemplo, la web del MAGRAMA contiene el siguiente acceso:  
informacion@magrama.es

34. A finales de 2011 se adoptó el Real Decreto 1495/2011 que desarrolla la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, en el ámbito del sector público estatal, en lo relativo al régimen jurídico de la reutilización, las obligaciones del sector público estatal y las modalidades de reutilización de los documentos reutilizables. Supone un avance considerable hacia la transparencia informativa de la Administración

35. En esta línea, actualmente se está trabajando en la aprobación del Plan de Medidas de Impulso de la Reutilización de la Información del MAGRAMA, tendente a mejorar la interoperabilidad y formatos de presentación de la información ambiental de manera que se facilite su reutilización por la ciudadanía.

### **Artículo 4, párrafo 2**

36. Tanto la Administración estatal como la autonómica tienen implantados o se hallan en proceso de implantación, sistemas para controlar que la información se suministra en los plazos establecidos, con objeto de corregir los incumplimientos que puedan producirse. Asimismo, los Gobiernos locales también disponen de medios para el acceso a la información.

### **Artículo 4, párrafos 3 y 4**

37. En el artículo 13 de la Ley 27/2006, se enumeran de forma taxativa las únicas circunstancias cuya concurrencia puede suponer la denegación de la solicitud de información ambiental y se dispone que estos motivos de denegación deberán interpretarse de manera restrictiva, ponderándose en cada caso concreto el conflicto de intereses entre la divulgación y la denegación de la información.

### **Artículo 4, párrafo 5**

38. Este derecho se reconoce en el artículo 10, apartado 2. b) de la Ley 27/2006, siendo práctica habitual, tanto en la Administración estatal como en la autonómica, orientar al público sobre la autoridad a la que debe dirigirse o trasladar su solicitud a dicha autoridad.

#### **Artículo 4, párrafo 6**

39. Este derecho se reconoce en el artículo 14 de la Ley 27/2006. En caso de que no pueda suministrarse la totalidad de la información, se remite al solicitante la parte a la que puede acceder, indicándole los motivos de la denegación parcial.

#### **Artículo 4, párrafo 7**

40. Este derecho se reconoce en el artículo 10, apartado 2 de la Ley 27/2006.

#### **Artículo 4, párrafo 8**

41. En el artículo 15 de la Ley 27/2006 se establece la obligación de las autoridades públicas de elaborar, publicar y poner a disposición de los solicitantes de información ambiental el listado de las tasas y precios públicos y privados que sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos en los que no proceda pago alguno. Asimismo, la Disposición Adicional Primera crea la tasa por suministro de información ambiental para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (nivel nacional). En la actualidad se está elaborando una norma sobre tasas por acceso a la información ambiental para el sector público estatal con efecto de fijar la cuantía de la misma, siempre de acuerdo con las especificaciones del Convenio. A la espera de la aprobación de esta norma, en la actualidad no se aplica tasa alguna en la Administración del Estado por la entrega de información ambiental. A estos efectos, las Comunidades Autónomas promulgan sus disposiciones específicas.

### **VIII. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA APLICACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 4**

42. Además de los indicados en el apartado IV, también hay que señalar la dificultad que existe en ciertas ocasiones para hacer compatible los derechos de propiedad intelectual y los de acceso a la información ambiental, así como alguna información que aunque se refiere a elementos ambientales tiene carácter comercial. En este sentido, cabe mencionar, por ejemplo, la obligación de informar al público sobre la localización exacta de las parcelas en las que se llevan a cabo liberaciones voluntarias de OMG. (Ver párrafo 171)

43. Otro obstáculo viene dado por el excesivo uso del silencio administrativo ante una solicitud de información ambiental– esto es, la falta de respuesta en plazo – que si bien permite acceder a la vía judicial, no cumple con el requisito de la motivación ni de informar de los recursos de que es susceptible esta denegación.

44. Se han detectado algunas dificultades en acceder por parte de los solicitantes de información, a determinadas bases de datos a las que hace referencia la propia página web. Se espera que con la puesta en aplicación del Plan de Reutilización de la Información en poder de la Administración, puedan homogeneizarse y simplificarse los accesos a datos generados por la AGE en el desarrollo de sus competencias.

## **IX. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 4**

45. En la Memoria Anual del Ministerio, a la cual puede accederse a través de la página web del Departamento, aparecen datos estadísticos sobre número de solicitudes recibidas, número de denegaciones efectuadas y sus motivos y, en general, sobre todo lo relativo al tratamiento, por parte tanto de la Administración estatal como de la autonómica, de las solicitudes de información ambiental. Esta publicación permite consulta y descarga gratuitas desde la web

46. Las Comunidades Autónomas también editan y publican sus propias estadísticas.

47. Con respecto a la calidad de la información, en el año 2012 se concluyó un estudio sobre la calidad de la información ambiental en las Comunidades Autónoma, realizado por una ONG (Asociación de Ciencias Ambientales) con financiación de la Fundación Biodiversidad dependiente del MAGRAMA. El estudio está disponible a través del siguiente enlace:

<http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/noticias/205-2o-estudio-sobre-la-calidad-de-la-informacion-ambiental-autonomica-en-la-red.html>

## **X. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 4**

48. Las indicadas en el párrafo 32.

## **XI. MEDIDAS LEGISLATIVAS, REGULADORAS Y OTRAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTEN LAS PREVISIONES SOBRE RECOPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ARTÍCULO 5.**

### **Artículo 5, párrafo 1**

49. El artículo 5.2 de la Ley 27/2006 obliga a las autoridades públicas a velar, en la medida de sus posibilidades, porque la información recogida por ellas o la recogida en su nombre esté actualizada y sea precisa y susceptible de comparación. Por su parte, el artículo 7 de la Ley obliga a que la información que se difunda sea actualizada, si procede, y a que incluya determinados contenidos mínimos.

50. En las situaciones de amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente, según el artículo 9 de la Ley, las Administraciones públicas quedan obligadas a difundir inmediatamente y sin demora toda la información que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, de forma que permita al público que pueda resultar afectado adoptar las medidas necesarias para prevenir o limitar los daños que pudieran derivarse de tales amenazas.

51. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, asume la coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas..

52. Tanto en el ámbito estatal como en el de las Comunidades Autónomas, existe legislación específica en materia de alertas, así como protocolos de actuación y convenios que posibilitan que se difunda la información apropiada.

### **Artículo 5, párrafo 2**

53. La Ley 27/2006, en su artículo 1.2, garantiza la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más amplio posible. El artículo 5 de esta Ley garantiza las medidas prácticas recogidas en el Convenio, tales como: designación de unidades responsables de información ambiental, creación y mantenimiento de medios de consulta de la misma, creación de registros o listas de la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o puntos de información, fomento de las telecomunicaciones, etc. Las obligaciones en materia de difusión de la información ambiental se incorporan en el artículo 6.2 de la Ley. Desde la publicación de la citada Ley en 2006 se ha cumplido la previsión de mejora progresiva en la puesta a disposición del público de la información ambiental, y en lo que se refiere al fomento de las telecomunicaciones ha experimentado una extensión significativa

54. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, establece la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de toda información que obre en poder de las Administraciones, cualquiera que sea su soporte. En desarrollo de esta Ley, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas están impulsando el proyecto [Datos.Gob](#), que promueve una cultura de reutilización de la información en el ámbito de la Administración pública.

55. Por parte de algunas Comunidades Autónomas se han organizado Redes o Sistemas de Información Ambiental y/o Catálogos de Fuentes de Datos Ambientales, se ha puesto en marcha el proceso de elaboración de listas de información ambiental y se han desarrollado actividades de divulgación de los preceptos de la nueva normativa a los sectores interesados.

### **Artículo 5, párrafos 3 y 5**

56. La Ley 27/2006, en su artículo 6, apartados 3 y 4, obliga a las autoridades públicas a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información ambiental se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones, bien directamente, bien mediante los correspondientes enlaces.

57. A tales efectos, tanto el MAGRAMA como las Comunidades Autónomas disponen de portales web de información medioambiental, que en su caso permiten también el acceso a la información de las distintas redes y a información georreferenciada.

58. El contenido mínimo que debe abarcar la información objeto de difusión aparece desarrollado en el artículo 7 de la Ley 27/2006. Este contenido es más amplio que el contemplado en el propio Convenio.

59. El MAGRAMA difunde a través de la página web información sobre las medidas legislativas adoptadas en relación con las competencias del Ministerio y sobre planes y programas por áreas de actividad

60. La página web del MAGRAMA pone a disposición del público la información relativa a las actividades que se llevan a cabo en España con OMG y se publican los informes de resultados de las notificaciones de liberación voluntaria, así como las autorizaciones otorgadas por el Consejo Interministerial de OMG. Informa también sobre la legislación en vigor a nivel comunitario, nacional y de las Comunidades Autónomas relativa a OMG.

61. Las Comunidades Autónomas también han realizado importantes esfuerzos en el cumplimiento del párrafo 3, incorporando el monitoreo en redes de control y vigilancia de la calidad del aire, la calidad de las aguas, la gestión de los residuos, etc.

#### **Artículo 5, párrafo 4**

62. El MAGRAMA publica y difunde anualmente las Memorias de actuaciones del Ministerio y la publicación, en castellano y en inglés, del “Perfil ambiental de España” (basado en indicadores seleccionados en el marco de la Red EIONET española), así como otras publicaciones unitarias y periódicas que incorporan información medioambiental. Todos ellos están disponibles en la web del Ministerio y en algunos casos con ediciones amplias en distintos idiomas y de difusión gratuita.

63. También desde el año 2006, el Ministerio promueve la publicación anual de las ponencias elaboradas por el Observatorio de Políticas Ambientales, integrado por 47 profesores pertenecientes a 30 centros universitarios que desarrollan análisis independientes de las políticas ambientales de las comunidades autónomas en su contexto estatal, comparado, europeo e internacional.

64. El Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) es un proyecto de elaboración y difusión de la información ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, accesible a través de la web, que permite disponer de un modo muy intuitivo y ágil de los principales datos sobre el medio ambiente. Recientemente se ha llevado a cabo una actualización de todos los indicadores, con la mejor información disponible hasta la fecha. Los indicadores se presentan en un formato ilustrado con gráficos, a los que acompañan definiciones y notas que los hacen asequibles para un público muy amplio. Los 68 indicadores ambientales se estructuran dentro de un sistema dividido en 14 áreas, que ofrecen un abanico muy amplio de asuntos relacionados con la conservación del medio ambiente y permiten ver su evolución en el tiempo: Aire, Agua, Suelo, Naturaleza y Biodiversidad, Residuos, Agricultura, Energía, Industria, Pesca, Turismo, Transporte, Hogares, Medio Urbano y Desastres Naturales y Tecnológicos.

65. El Banco de Datos de la Naturaleza, adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural gestiona la información sobre el estado de los elementos del medio ambiente relacionados con el medio natural. Esta información se pone a disposición del público sin solicitud previa y de forma gratuita.

66. El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), impulsado por este Departamento, elabora además un informe anual, basado en indicadores sobre desarrollo sostenible en España, coherente con los producidos por la AEMA, y la edición de bolsillo “Sostenibilidad en España”.

67. Aparte de estos informes generales son numerosas las fuentes estadísticas específicas proporcionadas por el MAGRAMA, EUROSTAT y numerosos organismos especializados, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), etc.

68. Los datos estadísticos sobre los distintos parámetros ambientales recopilados anualmente de las distintas administraciones por el MAGRAMA, se remiten a la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y en ocasiones son coeditados con posterioridad.

69. Las Comunidades Autónomas elaboran periódicamente Informes sobre el estado del Medio Ambiente y en su caso Sistemas propios de indicadores ambientales a nivel regional.

#### **Artículo 5, párrafo 6**

70. La disposición adicional duodécima de la Ley 27/2006 obliga a las Administraciones públicas a promover que los operadores económicos, cuando estén obligados a ello, informen periódicamente al público sobre aquellas de sus actividades o productos que tengan o puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este ámbito, los Inventarios PRTR nacional y de las Comunidades Autónomas incluyen datos sobre las emisiones de las empresas con mayor potencial contaminante. Por su parte, el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, posibilita que las organizaciones públicas y privadas, con o sin ánimo de lucro se adhieran voluntariamente al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). El ecoetiquetado y la producción agrícola ecológica permiten mecanismos similares de difusión de la información sobre actividades privadas y productos que pueden tener un impacto importante sobre el medio ambiente.

71. A nivel autonómico, se han adoptado iniciativas dirigidas a los consumidores y productores de residuos para fomentar la reducción en origen y a los usuarios urbanos sobre buenas prácticas en el consumo de energía, agua y separación de residuos, y en algunos casos se han previsto medidas de apoyo económico para actuaciones en materia de implantación de sistemas de gestión medioambiental.

72. Los operadores económicos, especialmente los grandes distribuidores han informado de su contribución a la reducción de bolsas de plástico no biodegradables de un solo uso a través de campañas propias y promovidas por el MAGRAMA.

#### **Artículo 5, párrafo 7**

73. Además de las publicaciones existentes y de la difusión y participación efectuadas mediante Internet, existen en todas las Administraciones unidades de información, y de recepción y tramitación de quejas y sugerencias, en relación con el medio ambiente, junto a medios electrónicos de acceder a las mismas.

#### **Artículo 5, párrafo 8**

74. El etiquetado de los alimentos se encuentra actualmente regulado en nuestro país mediante el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, y que incorpora las disposiciones de la legislación comunitaria en la materia. Esta norma, es de aplicación tanto para el etiquetado de los productos alimenticios destinados al consumidor final como a restaurantes, hospitales, cantinas y otras colectividades similares.

75. Sobre la etiqueta ecológica europea (EEE), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está elaborando un Real Decreto para la aplicación de la EEE en España de acuerdo con los criterios del Reglamento (CE) nº 66/2010, que sustituirá en su momento al vigente Real Decreto 598/1994

76. Del mismo modo, el etiquetado de productos de la pesca, de las sustancias peligrosas, del ruido en los aparatos de uso doméstico, del consumo de la energía, etc., cuentan con normativa estatal propia que abarca la información sobre aspectos ambientales.

77. Algunas Comunidades Autónomas realizan acciones de control sobre el etiquetado de los aparatos eléctricos y electrónicos y los distintivos de sistemas integrados de gestión de residuos. Tanto éstas como algunos gobiernos locales, también han elaborado catálogos de compras verdes, difundiendo criterios de sostenibilidad en la contratación pública de bienes y servicios.

#### **Artículo 5, párrafo 9**

78. Desde el 1 de enero de 2008, el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes pasa a ser el Registro PRTR-España, el cual sustituye al anterior registro EPER-España (existente desde 2001), cumpliendo el Reglamento (CE) 166/2006 E-PRTR y el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de autorizaciones ambientales integradas. Dichas normas se encuadran dentro del marco del Convenio de Aarhus y del Protocolo PRTR del cual España es parte. De acuerdo con dicho Protocolo, los complejos industriales realizan periódicamente las notificaciones con los nuevos criterios PRTR.

79. Toda la información relativa al registro PRTR-España está disponible en Internet y es fácilmente accesible para todas las partes interesadas y público en general en la dirección [www.prtr-es.es](http://www.prtr-es.es). La información, que se divulga en castellano, en las demás lenguas oficiales españolas y en inglés, incluye enlaces a inventarios de sistemas internacionales y de las Comunidades Autónomas. PRTR-España, dispone además de un buzón ([info@prtr-es.es](mailto:info@prtr-es.es)), donde partes interesadas, administraciones y público en general, pueden acceder a consultas y solicitudes de información adicional así como participar con sus sugerencias y observaciones en la construcción y mejora del registro. Las consultas/sugerencias al buzón, pueden realizarse en español e inglés.

## **XII. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5.**

80. El carácter transversal de la materia conlleva ciertos problemas de tipo organizativo y de coordinación administrativa que afectan, en mayor o menor medida, a las distintas Administraciones públicas a la hora de aplicar el artículo 5.

81. Entre las dificultades para elaborar informaciones específicas agregadas para el conjunto de España a partir de datos facilitados por las Administraciones autonómicas y locales se detectan algunos problemas de homogeneidad, lo que aconseja reforzar los mecanismos de coordinación.

82. En algunas Comunidades Autónomas, y en el propio Ministerio, los recursos materiales y humanos disponibles han sido insuficientes para atender debidamente la totalidad de las obligaciones de acceso y difusión de la información ambiental en los plazos establecidos. Se ha observado, sin embargo, en muchas Comunidades Autónomas, una mejora significativa de la calidad de la información suministrada. A nivel local se observan mayores dificultades de seguimiento estadístico de las peticiones y su tramitación

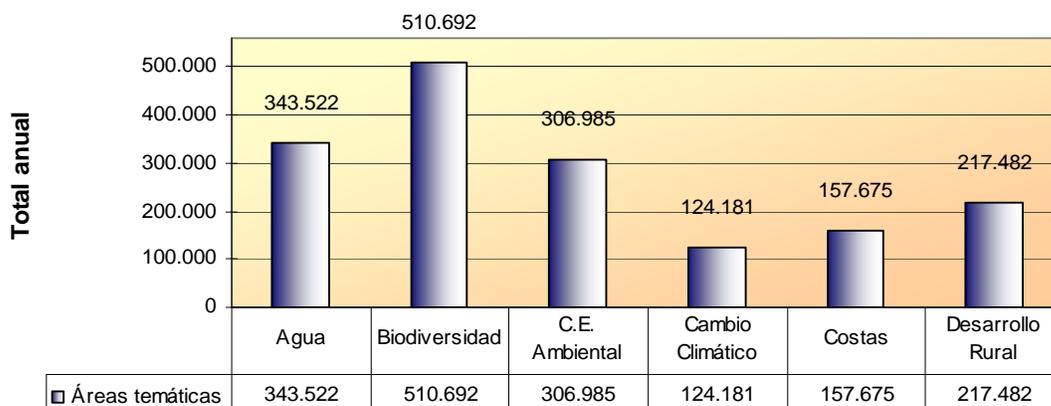
### **XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 5.**

83. El nivel de acceso a la información pública de la página de PRTR-España ([www.prtr-es.es](http://www.prtr-es.es)), se mantiene sobre el 1.000.000 de visitas anuales, siendo el mes de noviembre normalmente en el que más visitas se suelen recibir, coincidiendo con la fecha de la publicación de nuevos datos. Proviene de todas las partes del mundo, muy especialmente de EE.UU, de Iberoamérica y también de países europeos. La información más solicitada hace referencia a los datos públicos de emisiones y transferencias de residuos fuera del emplazamiento por sectores de actividad industrial, al inventario de instalaciones y a las descarga de documentos pdf, además de información gráfica y tablas.

84. En la tabla y gráfico adjuntos se pueden ver los valores de las visitas efectuadas, por Áreas Temáticas, al portal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

<b>Áreas Temáticas</b>	<b>Visitas</b>	<b>Total anual 2012</b>
Agua		343.522
Biodiversidad		510.692
C.E. Ambiental		306.985
Cambio Climático		124.181
Costas		157.675
Desarrollo Rural		217.482

**Total de visitas por Áreas Temáticas  
año 2012**



**XIV. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 5.**

85. <http://www.prtr-es.es> además de las indicadas en el párrafo 32.

**XV. MEDIDAS LEGISLATIVAS, REGULADORAS Y OTRAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTEN LAS PREVISIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN DECISIONES SOBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL ARTÍCULO 6.**

86. La participación pública en decisiones sobre actividades específicas del artículo 6 del Convenio se articula a través de los procedimientos específicos regulados en la correspondiente legislación sectorial. Así, el artículo 3.2.e) de la Ley 27/2006 establece que todos tienen derecho a participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, para la concesión de los títulos administrativos regulados en la legislación en materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental.

87.- Es importante destacar que mediante las disposiciones finales primera y segunda de la Ley 27/2006, se modificó la normativa básica sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Prevención y Control Integrados de la Contaminación con el fin adecuarla a las reglas sobre participación previstas en el Convenio de Aarhus, fundamentalmente mediante la redefinición de los conceptos de “público” y “persona interesada” y la introducción de la participación temprana.

**Artículo 6, párrafo 1**

88. La participación en procedimientos de autorización de las actividades recogidas en el Anexo I del Convenio se regula, como hemos visto, en la correspondiente legislación sectorial, fundamentalmente en la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, IPPC, (para la concesión de autorizaciones ambientales integradas, AAI) y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (para evaluar el impacto ambiental de proyectos o actividades)

89. La Ley 16/2002 IPPC es aplicable a las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anejo 1. Como mínimo, deberán cumplirse los valores límite de emisión establecidos en las normas del anejo 2, y en su caso, los establecidos en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades Autónomas.

90. Por su parte, el RDL 1/2008 afecta en todo caso a la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I de la Ley EIA, debiendo sólo someterse a una EIA cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los supuestos de proyectos o actividades comprendidos en el anexo II, y los que no estén incluidos en el anexo I pero que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000.

91. Las Comunidades Autónomas han desarrollado la legislación general tanto en uno como en otro caso (Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía; Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en les Illes Balears; Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria y su Reglamento, aprobado por Decreto 19/2010 de 18 de marzo; Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha; Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades en Cataluña; Ley 6/2009, del 28 de abril de 2009, de evaluación ambiental de planes y programas, también en Cataluña; Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid; Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente en La Rioja; Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, etc), pudiendo existir también legislación de tipo organizativo o institucional que regule la participación pública (Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración Pública de Galicia). Extremadura está trabajando en la aprobación de un reglamento sobre evaluación ambiental y otro de Autorizaciones y Comunicación Ambiental.

## **Artículo 6, párrafo 2**

92. Respecto a la información que debe ofrecerse, la regulación de los procedimientos de Autorización Ambiental Integrada en la Ley 16/2002 incluye, entre otras, la garantía de la participación “real y efectiva” de las personas interesadas (artículo 14) y establece en su Anejo 5 que el órgano competente informará al público en aquellas fases iniciales del procedimiento sobre, entre otros, los siguientes extremos: la solicitud de autorización ambiental o, en su caso, la renovación o modificación del contenido de aquella; la identificación de los órganos competentes para resolver, de aquellos de los que pueda obtenerse información pertinente y de aquellos a los que puedan remitirse observaciones o formularse preguntas, con expresa indicación del plazo del que se dispone para ello; la naturaleza jurídica de la resolución de la solicitud o, en su caso, de la

propuesta de resolución; las fechas y el lugar o lugares en los que se facilitará la información pertinente, así como los medios empleados para ello; las modalidades de participación del público y de consulta al público definidas.

93. En los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el RDL 1/2008 también garantiza la participación “real y efectiva” desde un momento temprano (artículo 1.4) y regula lo referente al trámite de información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas (artículo 9), ofreciendo una información similar a la descrita en el apartado anterior: solicitud de autorización del proyecto, identificación de órganos competentes, naturaleza de las decisiones, fecha y lugar donde la información estará disponible, modalidades de participación, información contenida en el estudio de impacto ambiental y demás documentación relevante.

94. En algunas Comunidades Autónomas se han elaborado reglamentos sobre participación que regulan la tramitación de autorizaciones o de toma de decisiones, entre otras, de aquéllas que no están sometidas a un procedimiento reglado de participación pública.

95. En algún caso, las Comunidades Autónomas cuentan con órganos “ad hoc” en materia de participación, dentro de su organización administrativa.

96. Las Comunidades Autónomas y los Gobiernos locales, en general, han adoptado medidas en materia de participación, estableciendo nuevas vías o reforzando las ya existentes, especialmente las derivadas de la Agenda 21 Local en el caso de los municipios. Para ello, ambas Administraciones han impulsado el uso de las nuevas tecnologías.

### **Artículo 6, párrafo 3**

97. En el procedimiento de EIA, el órgano sustantivo informará a las personas interesadas y a las Administraciones públicas afectadas del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y del momento en que pueden ejercitar tal derecho; la notificación indicará la autoridad competente a la que se deben remitir las observaciones y alegaciones en que se concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas, que no podrá ser inferior a 30 días (artículo 9.3 del RDL 1/2008).

98. En cuanto a la AAI, el artículo 5 del Anejo 5 de la Ley 16/2002 dispone que, en todo caso, se establecerán plazos razonables para las distintas fases que concedan tiempo suficiente para informar al público y para que las personas interesadas se preparen y participen efectivamente en el proceso de toma de decisiones.

99. Para planes y programas relativos al medio ambiente, existen otros plazos de participación pública suficientes, según se establece en cada legislación sectorial. A título de ejemplo, los Planes Hidrológicos se someten a consulta pública por un período mínimo de 6 meses, según lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Planificación Hidrológica

100. Por otra parte, la regulación general de información pública contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, prevé la posibilidad de realizar un trámite de urgencia, reduciéndose los plazos a la mitad si bien es necesario justificarlo por interés público.

#### **Artículo 6, párrafo 4**

101. La Ley 16/2002, mediante la modificación introducida por la Ley 27/2006, garantiza la participación desde las fases iniciales de los respectivos procedimientos (artículo 14), aplicándose a tales efectos las previsiones en materia de participación del público en la toma de decisiones establecidas en su Anejo 5.

102. El RDL 1/2008 recoge esta garantía en su artículo 8, al abrir el proceso de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas vinculadas con la protección del medio ambiente, en el momento de inicio del procedimiento de EIA. El artículo 9 especifica que dicho trámite se evacuará en aquellas fases del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto.

103. Para planes y programas, la legislación específica adapta sus procedimientos a los requerimientos del Convenio y la Ley nacional. Por ejemplo, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados dispone que las administraciones públicas garantizarán los derechos de acceso a la información y de participación en materia de residuos en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

104. De hecho, en la Administración General del Estado y en las Comunidades Autónomas, además de la intervención de los órganos colegiados consultivos cuando esté prevista, se propicia una participación temprana mediante Internet y con el envío de la información a las asociaciones, organizaciones y agentes implicados en los procedimientos.

#### **Artículo 6, párrafo 5**

105. Aunque no se recoja en la normativa, en el MAGRAMA no existe impedimento para que el promotor del proyecto realice consultas previas al inicio de los procedimientos de autorización de proyectos.

106. A nivel autonómico, la difusión de la información propicia que espontáneamente pueda producirse un debate previo, aunque tampoco esté regulado en la normativa, y en algún caso se ha firmado un Pacto Social por el Medio Ambiente que refuerza los mecanismos de comunicación.

#### **Artículo 6, párrafo 6**

107. La Ley 27/2006 regula el acceso a la información ambiental en los artículos 5 a 12, y en particular en el artículo 10 el acceso a la información ambiental previa solicitud. Asimismo, la normativa de Evaluación Ambiental - artículos 7 y 9.2e) - garantiza la puesta a disposición de la información a la que se refiere el artículo 6.6 del Convenio: descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos; estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones; exposición de las

principales alternativas estudiadas; evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre el medio ambiente; medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos; resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.

108. Además, se indica que el órgano sustantivo pondrá a disposición de todas las personas interesadas toda la documentación relevante recibida con anterioridad a la evacuación del trámite de información pública.

#### **Artículo 6, párrafo 7**

109. La regulación general del trámite de información pública incluye la posibilidad de alegar y presentar los documentos y justificaciones que los interesados estimen pertinentes, de acuerdo con la citada Ley 30/1992.

110. En particular, el artículo 9 del RDL 1/2008 dispone que el órgano sustantivo deberá informar al público sobre las autoridades ante las que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del plazo disponible para su presentación. Por su parte, la Ley IPPC establece en su Anejo 5 que las personas interesadas tendrán derecho a poner de manifiesto al órgano competente cuantas observaciones y opiniones considere oportunas antes de que se resuelva la solicitud.

111. Todas las vías de información, correo electrónico o postal, fax, teléfono, presencial, formulario en la web o registro telemático, se encuentran a disposición del público, con carácter general, en todas las Administraciones, para facilitar la participación y la presentación de alegaciones. Además, el MAGRAMA ha puesto a disposición de los sectores interesados la aplicación “Sede Electrónica” en su web, en relación con diversos procedimientos de su competencia, entre los que figuran los relativos a EIA (Programa “Sabia”).

#### **Artículo 6, párrafo 8**

112. En los procedimientos de EIA y AAI, los resultados de las consultas y de la información pública deberán tomarse en consideración por el promotor en su proyecto, así como por el órgano competente en la autorización del mismo (artículo 9.5 del RDL 1/2008, y artículo 4 del ANEJO 5 de la Ley 1/2002).

113. Para planes y programas, la Ley 27/2006 dispone con carácter general que al adoptar las correspondientes decisiones, los resultados de la participación pública serán debidamente tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas.

#### **Artículo 6, párrafo 9**

114. El artículo 12 del RDL 1/2008 determina que la Declaración de impacto ambiental se hará pública en todo caso (Boletines Oficiales) e incluirá las principales razones y consideraciones en las que se basa la decisión, en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante la evaluación de impacto ambiental y una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, anular los principales efectos adversos. El resultado

de los procedimientos también se publica en la página web, y se difunden por otros medios, tal como se ha ido desarrollando en el presente informe.

115. La Ley IPPC, por su parte, dispone que las Comunidades Autónomas harán públicas las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado o modificado las autorizaciones ambientales integradas y pondrán a disposición del público el contenido de la decisión acompañada de una memoria en la que se recojan los principales motivos y consideraciones en los que se basa la resolución administrativa, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.

#### **Artículo 6, párrafo 10**

116. Las modificaciones y cambios de las características y circunstancias en las que se ha autorizado un proyecto objeto del ámbito de aplicación de EIA o AAI, de acuerdo con la regulación básica del Estado, siempre es objeto de un examen tipo “screening”, al objeto de determinar la posible existencia de impactos significativos. En este procedimiento ya se ha mencionado el cauce de participación pública.

#### **Artículo 6, párrafo 11**

117. En materia de OMG, se remite a lo expuesto en los puntos XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI.

### **XVI. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6.**

118. En algunos casos, se echan en falta mayores recursos, mayor claridad en la distribución de competencias y mayor preparación de técnicos y funcionarios para poder incrementar la participación ciudadana en la Administración.

119. Los principales obstáculos identificados por los Gobiernos locales para la aplicación del Convenio de Aarhus han sido la falta de conocimiento en detalle de sus disposiciones y la falta de interés en el mismo por parte de una fracción considerable de la ciudadanía. Esta falta de interés, y en ocasiones también de conocimiento de la propia normativa, puede deberse en parte a la escasez de actividades de divulgación del Convenio y sus derechos asociados por parte de las autoridades responsables.

120. El plazo mínimo regulado en las legislaciones sectoriales para presentar alegaciones en los procedimientos sujetos a intervención ambiental, especialmente en las EIA y AAI resulta, en ocasiones, insuficiente, dado lo voluminoso de los expedientes y su complejidad técnica. No obstante, existiría la posibilidad de ampliar estos plazos pues en la mayoría de los casos se trata de plazos de carácter mínimo.

### **XVII. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LAS DECISIONES SOBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL ARTÍCULO 6.**

121. Quedan excluidos del trámite de EIA los proyectos relacionados con los objetivos de la Defensa Nacional cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos, así como los proyectos aprobados específicamente por una ley del Estado (disposición adicional primera del RDL 1/2008) . También está prevista la exclusión de proyectos de dicho procedimiento por motivos excepcionales, mediante acuerdo motivado del Consejo de Ministros.

122. Para facilitar la aplicación de estos derechos, se publican en Internet bases de datos de expedientes sometidos a EIA de proyectos, tanto por el MAGRAMA como por parte de las Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas.

#### **XVIII. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 6.**

123. <http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/> además de las indicadas en el apartado 32.

#### **XIX. DISPOSICIONES PRÁCTICAS Y/U OTRAS DISPOSICIONES QUE SE HAN ADOPTADO PARA QUE EL PÚBLICO PARTICIPE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 7**

124. La Ley 27/2006 establece una doble vía para la participación pública en planes y programas: por un lado, enuncia las materias en las que necesariamente se aplicará el procedimiento regulado en la propia Ley (Residuos, Pilas y acumuladores, Nitratos, Envases, Calidad del aire y las que se establezcan en la normativa autonómica) y por otro lado, remite a la legislación sectorial específica reguladora de la participación en materia de aguas y en planes y programas afectados por la legislación sobre la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente. (La Ley 9/2006 que incorpora la Directiva 2001/42/CE, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente)

125. En materia de aguas, la consulta pública de los documentos de la planificación hidrológica es un proceso formal obligatorio requerido tanto por la Directiva Marco del Agua como por el texto refundido de la Ley de Aguas, y desarrollado en el artículo 74 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. En cuanto a los proyectos de planificación hidrológica, el público en general puede acceder a través de web a los programas, calendarios y fórmulas de consulta, al proyecto, estudio general de la demarcación, esquema de los asuntos más importantes y al proyecto de Plan Hidrológico. Además pueden después accederse a los documentos que han sido integrados en el Proyecto al superar la fase de consultas.

#### **XX. OPORTUNIDADES QUE EXISTEN PARA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE SEGÚN EL ARTÍCULO 7**

126. Además de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 27/2006, también se establecen, en su artículo 19, las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, como órgano colegiado de participación y seguimiento de las políticas ambientales, y entre ellas se recoge la de asesorar sobre los planes y programas de ámbito estatal que la presidencia le proponga en razón a la

importancia de su incidencia sobre el medio ambiente. Existen, además, otros órganos sectoriales de participación, tales como el Consejo Nacional del Agua, el Consejo Nacional del Clima, el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el Consejo para el Medio Rural y la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.

127. En el ámbito autonómico y sin perjuicio de la aplicación de las Leyes 27/2006 y 9/2006, se han incorporado herramientas que se ajustan al nuevo enfoque en materia de participación en la elaboración y aprobación planes y programas. Ello implica la consulta a las Administraciones afectadas, incluida la local, y al público interesado. También se articula la participación a través de órganos colegiados de carácter consultivo similares a los de ámbito nacional.

## **XXI. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 7**

128. Los problemas de escasa participación que puedan existir en este primer momento, se van subsanando paulatinamente y se espera alcanzar un mayor nivel de participación ciudadana. En ocasiones, se alega por parte de los interesados que los plazos de participación son insuficientes debido al volumen o complejidad de la información asociada al proyecto o actividad.

## **XXII. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 7**

129. Tanto en la Administración del Estado como en la autonómica, la participación ciudadana en la elaboración y aprobación de planes y programas se facilita por medio de la implantación de nuevas tecnologías que permiten la participación interactiva del ciudadano y que tiene por objeto la transparencia y fomento de la misma. En el ámbito de la Administración local, se están estableciendo nuevas vías de participación o se están reforzando las existentes, especialmente las derivadas de la Agenda 21 Local.

130. El MAGRAMA y algunas Comunidades Autónomas han creado en este último año perfiles en Facebook y otras redes sociales, para la difusión masiva de información y como vía adicional de participación en procedimientos ambientales. Esta herramienta social se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación en la sociedad actual.

131. La red social Biodiversia es un proyecto conjunto del MAGRAMA junto con la Fundación Biodiversidad, realizado gracias al apoyo del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el cual se puso en marcha, en el año 2011, un espacio virtual cuyo objetivo es canalizar la participación pública poniendo a disposición de los ciudadanos la información oficial generada en el marco del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de fomentar la educación y sensibilización ambiental. ([www.biodiversia.es](http://www.biodiversia.es))

132. El MAGRAMA ha puesto en marcha el espacio CHIL, una plataforma profesional abierta, colaborativa y gratuita que facilita la participación de profesionales especializados en conocimiento agroalimentario y medioambiental ( [www.chil.org](http://www.chil.org). )

133. En la página <http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/> se incluye un listado de todos los proyectos sometidos a participación pública. A título de ejemplo, en el momento de redactar este informe se encuentra abierto a participación pública el proyecto

del Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013-2020 en el ámbito de Planes y programas

### **XXIII. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 7**

134. <http://www.magrama.gob.es/es/participacion-publica/>, además de las indicadas en el apartado 32.

### **XXIV. ESFUERZOS REALIZADOS PARA PROMOVER UNA EFECTIVA PARTICIPACIÓN PÚBLICA DURANTE LA PREPARACIÓN, POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, DE DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS U OTRA NORMATIVA JURÍDICAMENTE VINCULANTE DE APLICACIÓN GENERAL, QUE PUEDA TENER EFECTO SIGNIFICATIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 8**

135. En el ámbito estatal, el marco jurídico general se recoge el artículo 24 de la Ley 50/97, del Gobierno que regula el trámite de audiencia e información pública en la elaboración de reglamentos. Esta previsión estatal se completa con la obligación de las Administraciones públicas, recogida en el artículo 18 de la Ley 27/2006, de asegurar que se observan las garantías necesarias para asegurar la participación en materias medioambientales.

136. El artículo 19. 2 de la Ley 27/2006 establece que el CAMA, tiene que informar todos los proyectos normativos sobre las materias ya mencionadas, con carácter previo a su aprobación. Del mismo modo, existen determinados órganos colegiados (Consejo Nacional del Agua, Comisión Nacional del Clima, Biodiversidad), que cuentan con la participación de los agentes sociales y entidades de defensa ambiental más representativas que han de conocer de manera preceptiva sobre los proyectos normativos en los sectores señalados.

137. Las normas de desarrollo de la Administración autonómica prevén el fomento de la participación social, garantizando la efectividad de los trámites de información pública.

### **XXV. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 8**

138. Aunque tal como se ha comentado, se han desarrollado diversas campañas de sensibilización medioambiental promovidas por las distintas Administraciones y ONGs, se considera conveniente incidir específicamente en la conveniencia de un mejor conocimiento sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de forma especial en el ámbito de las Administraciones Locales, dada su proximidad a los ciudadanos.

### **XXVI. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 8**

139. A través de la página web del MAGRAMA se someten a consulta pública anteproyectos de ley y reglamentos de incidencia ambiental para que los ciudadanos los valoren y envíen comentarios y observaciones con anterioridad a su aprobación. Convendría, no obstante, advertir

de manera puntual e individualizada a las ONGs ambientales sobre estas publicaciones, en tanto especialmente interesadas en esta participación.

## **XXVII. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 8**

140. <http://www.magrama.gob.es/es/participacion-publica/>, además de las indicadas en el apartado 32.

## **XXVIII. MEDIDAS LEGISLATIVAS, REGLAMENTARIAS Y OTRAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTAN LAS PREVISIONES SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA DEL ARTÍCULO 9<sup>1</sup>**

### **Artículo 9, párrafos 1 y 2**

141. El artículo 20 de la Ley 27/2006 establece que el público que considere que un acto o, en su caso, una omisión imputable a una autoridad pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en materia de información y participación pública podrá interponer los recursos administrativos regulados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tras la resolución del recurso administrativo, si el particular no estuviera satisfecho puede interponer recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las resoluciones que resuelven los recursos administrativos y judiciales son vinculantes para la Administración y serán motivados y comunicados por escrito.

### **Artículo 9, párrafo 3**

142. El artículo 22 de la Ley 27/2006, consagra la acción popular según la cual los actos y, en su caso, las omisiones imputables a las autoridades públicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el artículo 18.1 de la Ley 27/2006 podrán ser recurridas a través de los recursos administrativos regulados en la Ley 30/1992 así como a través del recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998. Están legitimadas para ejercer la acción popular cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 23 de la Ley 27/2006.

143. A nivel nacional, la acción pública, sin ningún tipo de requisito previo, está reconocida en materias como el planeamiento urbanístico, la protección de las costas, el patrimonio cultural o los Parques Nacionales, mientras que a nivel regional, algunas comunidades autónomas, como el País Vasco y Navarra, han establecido acciones públicas para la defensa general del medio ambiente.

### **Artículo 9, párrafo 4**

---

<sup>1</sup> Actualmente el MAGRAMA, en colaboración con el Ministerio de Justicia, está realizando un estudio sobre el acceso a la justicia ambiental en España que será presentado en la V Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus. (Ver apartado XXXVII de este Informe)

144. Resulta de aplicación la normativa general que regula el procedimiento para resolver recursos administrativos y judiciales. En ella se prevén todas las garantías que aseguran la eficacia y publicidad de las decisiones adoptadas al resolver los recursos administrativos y judiciales, incluida la posibilidad de adoptar medidas cautelares.

#### **Artículo 9, párrafo 5**

145. El artículo 58 de la Ley 30/1992 establece la obligación de cursar las notificaciones en el plazo de diez días, y que en ellas deberá indicarse si el acto es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Respecto a la reducción de obstáculos financieros, el artículo 23. 2 de la Ley 27/2006, en consonancia con el artículo 119 de la Constitución, prevé que las personas jurídicas sin ánimo de lucro a las que se refiere el apartado 1 de este artículo tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y en su Reglamento (RD 996/2003).

### **XXIX. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 9**

146. A pesar del derecho a un proceso “sin dilaciones indebidas” (art. 24.2 de la Constitución Española), el principal obstáculo para la plena implementación del artículo 9 radica en la excesiva duración de los procesos en sede judicial. Precisamente con la intención de agilizar procedimientos, recientemente se ha aprobado la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

### **XXX. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 9**

147. Según datos recabados por el Consejo General de la Abogacía Española, durante 2011 se recibieron más de 900.000 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, que supusieron que los diferentes Colegios de Abogados remitieran a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las comunidades autónomas con competencias en Justicia o del Ministerio de Justicia más de 848.000 expedientes, de los que se ratificaron una media del 79%. La jurisdicción que tiene un mayor peso en la inversión total es la de Penal, que acapara el 64% del total de este Servicio, seguido de Civil (22%), Contencioso-Administrativa (5%) y Social (2%).

148. En cuanto a la duración media de los procedimientos en el orden Contencioso-Administrativo, donde se sustancian la gran mayoría de procedimientos de incidencia ambiental, el Consejo General del Poder Judicial ofrece en su estudio “La Justicia data a dato: 2011” la siguiente estadística (el tiempo figura expresado en meses):

## Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

	2011	2010	2009	2008	2007
Jdos. de lo Contencioso	12,9	12,0	11,1	10,6	10,2
T.S.J. Sala Contencioso*	25,9	25,7	26,2	29,0	31,6
J. Central Contencioso	16,9	16,0	14,8	11,8	9,2
A. Nacional. Sala Contencioso*	18,6	17,1	17,6	18,1	18,2
Tribunal Supremo Sala 3ª	18,0	17,2	18,8	19,7	21,3

\* En única instancia

### XXXI. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 9

149. La Justicia dato a dato: 2011

[http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica\\_Judicial/Analisis\\_estadistico](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Analisis_estadistico)

Consejo General del Poder Judicial:

[http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder\\_Judicial](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial)

Ministerio de Justicia:

<http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550194/DetalleInicio.html>

### XXXII. COMENTARIO GENERALES SOBRE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO

150. El Gobierno de España, los Gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas y de las entidades locales estiman que la transparencia y el fomento de la participación de la ciudadanía son los instrumentos clave de una política ambiental moderna y democrática. El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de las reformas que tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una Administración moderna. El que las personas estén perfectamente informadas sobre sus derechos, para que sean capaces de demandar el cumplimiento de las normas medioambientales y tomar parte activa en el proceso de conservación y mejora del medio ambiente se configura como una pieza clave para un seguimiento y control efectivos de las actividades de la Administración.

151. El papel de las ONG y de las asociaciones con fines medioambientales ha sido especialmente decisivo en la toma de conciencia generalizada sobre los problemas ambientales y en la potenciación de los instrumentos jurídicos de control y de tutela.

152. La implementación del Convenio de Aarhus, sin lugar a dudas, ha servido no sólo para garantizar una serie de derechos relativos al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, sino que, al contar con la participación de las unidades con competencias medioambientales de todas las Administraciones Públicas y con los agentes sociales implicados y difundir ampliamente el Convenio y la Ley 27/2006, ha servido también para que se tome conciencia de la importancia que tiene el ejercicio de estos derechos por parte de unos y el respeto y fomento del mismo por parte de otros.

### **XXXIII. MEDIDAS LEGISLATIVAS, REGULADORAS Y OTRAS MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LIBERACIÓN VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACIÓN DEL ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (OMG) DEL ARTÍCULO 6 BIS Y ANEXO I BIS**

153. Las disposiciones aprobadas en la materia son las siguientes: Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la citada Ley, Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero; Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos en el área de Medio Ambiente para su adaptación a la legislación de libre acceso a las actividades de servicios (Ley 17/2009 y Ley 25/2009) y la Orden ARM/2616/2010, de 5 de octubre, por la que se establece la composición y funcionamiento del Comité de Participación en el marco del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente

154. En la legislación mencionada se denomina Autoridad Competente, a nivel nacional, al Consejo Interministerial de OMG y a la Comisión Nacional de Bioseguridad, y a nivel regional, a cada una de las Comunidades Autónomas de acuerdo a las competencias que tienen atribuidas en materia de OMG.

155. En relación con la liberación al medio ambiente de OMG, se considera información que no tiene carácter confidencial, la descripción de organismos modificados genéticamente, la identificación del titular, la finalidad, el lugar de la actividad, los sistemas de medidas de emergencia y control, la evaluación de los efectos para la salud humana y el medio ambiente, la información relativa a las liberaciones voluntarias realizadas, las autorizaciones de comercialización otorgadas, la relación de los organismos modificados genéticamente cuya comercialización haya sido autorizada o rechazada como productos o componentes de productos, los informes de evaluación, los resultados de los controles sobre comercialización, los dictámenes de los comités científicos consultados.

156. Como público se entiende cualquier persona física o jurídica, y como público interesado, Organizaciones no gubernamentales que trabajan en la conservación o protección del medio ambiente, industria de semillas, sindicatos agrarios, sindicatos de trabajadores, organizaciones de consumidores, industria farmacéutica humana y veterinaria, industria de producciones agrícolas y ganaderas.

157. En el Comité de Participación adscrito al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente están representados los sectores interesados, las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional, las cooperativas agroalimentarias, las organizaciones de consumidores y usuarios.

158. En cuanto al requisito de no discriminación del artículo 3, párrafo 9, resulta aplicable directamente la Constitución española de 1978, en concreto el artículo 14, que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

#### **Párrafo 1 del anexo I bis**

159. El artículo 25 del citado Real Decreto 178/2004 indica en su punto 4 que el órgano competente someterá a información pública durante un plazo de 30 días el proyecto de liberación voluntaria. Describe también qué información es la que debe ponerse a disposición del público.

#### **Párrafo 2 del anexo I bis**

160. El artículo 28 del Real Decreto 178/2004 contempla la posibilidad de establecer procedimientos diferenciados cuando se haya adquirido experiencia suficiente en ecosistemas específicos y cuando se cumplan los criterios del anexo VI del citado Real Decreto.

El artículo 29 del mismo Real Decreto contempla la opción de procedimiento simplificado cuando varias liberaciones voluntarias de vegetales que se han generado a partir de las mismas plantas receptoras cultivadas pero que puedan diferir en cualquiera de las secuencias insertadas o suprimidas o tener las mismas secuencias insertadas o suprimidas pero diferir en el fenotipo.

#### **Párrafo 3 del anexo I bis**

161. En el caso de liberación voluntaria sin intención de comercializar, el artículo 25.4 del Real Decreto 178/2004, sobre el procedimiento a seguir una vez recibida la solicitud, se establece que el órgano competente someterá a información pública durante un plazo de 30 días el proyecto de liberación voluntaria. La información al público deberá incluir un resumen del expediente, que incluirá el informe de evaluación ambiental.

En el caso de comercialización, la Disposición transitoria segunda, se refiere al procedimiento de renovación de autorizaciones de comercialización anteriormente concedidas, que es desarrollado en el artículo 41 del Real Decreto 178/2004.

#### **Párrafo 4 del anexo I bis**

162. El artículo 20.2 de la Ley 9/2003, especifica qué parte de la información que proporcionan los titulares de actividades reguladas por la ley, no tienen carácter confidencial y por tanto pueden ser suministradas a los ciudadanos sin ningún tipo de restricción.

#### **Párrafo 5 del anexo I bis**

163. El MAGRAMA dispone de una página web que es accesible a todo el público. Dentro de esta página web existe un apartado dedicado a los Organismos Modificados Genéticamente: <http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/>

En esta página web el usuario puede encontrar información sobre la estructura de la Administración en el contexto de los OMG, cómo se realiza la toma de decisiones y quien es responsable de tomarlas, cuales son las vías para la participación pública y los contactos del Ministerio que pueden proporcionar cualquier información relacionada con las liberaciones al medio ambiente de los OMG, además de enlaces a otras páginas de interés.

### **Párrafo 6 del anexo I bis**

164. En la página web de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental se encuentra la opción de acceder a la participación pública, tanto para las actividades de liberación voluntaria como de actividad confinada.

<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/participacion-publica/>

En esta página web se describe el procedimiento que debe seguir un ciudadano para presentar observaciones, objeciones o solicitar información adicional sobre cualquiera de los dos procedimientos.

### **Párrafo 7 del anexo I bis**

165. El artículo 16 de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece el procedimiento a seguir, una vez que se recibe una aportación por parte de un ciudadano por los cauces establecidos para ello.

### **Párrafo 8 del anexo I bis**

166. La Disposición adicional tercera de la ley 9/2003, indica que las Administraciones competentes crearán Registros públicos en los que se anotará la localización de los organismos modificados genéticamente liberados con fines distintos a la comercialización, así como la localización de los que se cultiven con conformidad con lo dispuesto en esta ley para su comercialización.

167. El artículo 27 del citado Real Decreto 178/2004, trata sobre la obligación de informar sobre las liberaciones voluntarias de OMG al Medio Ambiente sin intención de comercializar por parte del titular de las liberaciones.

168. El artículo 49 del mismo Real Decreto trata sobre información al público e indica que se debe poner a disposición del público la información relativa a las autorizaciones de utilización confinada, liberación voluntaria con fines distintos a la comercialización y la comercialización de organismos modificados genéticamente.

169. La página web de OMG dentro de la página web del MAGRAMA citada más arriba, contiene todos los datos incluidos en el Registro público y es de libre acceso para todos los ciudadanos.

### **Párrafo 2 del artículo 6 bis**

170. Todas las medidas legislativas, reguladoras y otras anteriormente relacionadas se encuadran dentro de nuestro marco nacional de bioseguridad y son coherentes con los objetivos del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, especialmente con los artículos 23, sobre Concienciación y participación pública, y 21, sobre Información confidencial, de dicho protocolo.

#### **XXXIV. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 BIS Y EL ANEXO I BIS**

171. La principal dificultad ha sido establecer una clara diferenciación entre la información que no tiene carácter confidencial y aquella que está protegida por los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, facilitar determinados datos, en concreto, la localización exacta de las parcelas experimentales, podía poner en peligro los propios ensayos con las consecuentes pérdidas económicas para la empresa o la institución pública responsable de los mismos. Han sido necesarios dos informes de los servicios jurídicos del Estado y una decisión del Consejo Interministerial de OMG para clarificar el nivel de detalle con el que se debe suministrar la información, siempre desde el más estricto cumplimiento de la legalidad.

172. Finalmente, se registraron algunos casos aislados de vandalismo en parcelas experimentales una vez fueron facilitadas las coordenadas de situación de los ensayos con cultivos modificados genéticamente.

#### **XXXV. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PREVISIONES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LAS DECISIONES SOBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL ARTÍCULO 6.**

173. Para el cumplimiento del Convenio de Aarhus, se realizan, anualmente, estadísticas sobre el número de solicitudes de información, en materia de OMG, por las diferentes vías posibles (teléfono, correo electrónico, correo ordinario).

#### **XXXVI. DIRECCIONES WEB RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 6.**

174. Página web OMG del MAGRAMA:

<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/>

Página Web OMG de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental:

<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/>

Información pública de liberaciones voluntarias:

<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/participacion-publica/liberacion-voluntaria/>

Información pública de utilización confinada:

<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/participacion-publica/uso-confinado/default.aspx>

Buzón para remitir comentarios sobre actividades con OMG:

[buzon-omg@magrama.es](mailto:buzon-omg@magrama.es)

Protocolo de Cartagena:

<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/protocolo-cartagena/>

#### **XXXVII. SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE CUMPLIMIENTO**

175. La Decisión IV/9f sobre el cumplimiento de España de sus obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus, da la bienvenida a los avances realizados por España en la materia, particularmente en lo relativo a acceso a la información y participación pública, a la vez que reconoce la necesidad de realizar más esfuerzos en el área de acceso a la justicia, para superar los obstáculos en la plena aplicación de los artículos 9.4 y 9.5 del Convenio

176. En esta línea, el Comité de Cumplimiento invita a España como Parte interesada a examinar a fondo, con una participación adecuada del público, la legislación pertinente en relación al acceso a la justicia en materia medio ambiental y, en particular, la práctica judicial en relación con:

- I. Medidas cautelares en asuntos medioambientales;
- II. Concesión de asistencia jurídica gratuita a las ONG ambientales, y
- III. El papel de la doble representación (Abogado y Procurador) en asuntos medioambientales.

177. También se invita a España a informar a la Reunión de las Partes de los progresos realizados en relación a las tasas cobradas por suministro de información urbanística y en relación a los plazos de participación pública en procedimientos ambientales.

178. En relación al estudio sobre acceso a la justicia, a fecha de elaboración de este informe, el estudio se encuentra finalizado y será presentado a la Reunión de las Partes a través del Comité de Cumplimiento dentro de los plazos previstos. El estudio ha sido elaborado por personal del MAGRAMA en colaboración con el Ministerio de Justicia y se ha contado con una participación adecuada del público según lo dispuesto por la Decisión IV/9f.

179. En relación a las tasas cobradas por suministro de información urbanística y los plazos de participación pública, toda la información relevante se encuentra en el siguiente link:

<http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppcc/envppccimplementation/fourth-meeting-of-the-parties-2011/spain-decision-iv9f.html>